



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20151340062961



10-03-2015

Bogotá D.C, 10-03-2015

Señora:

ANDREA MILENA SUAREZ VELASQUEZ.

Profesional Universitario Grado II

Diagonal 15 No 15 -21

Yopal – Casanare

Asunto: Tránsito – Prescripción de las Multas por Infracciones al Tránsito.

Mediante la comunicación del asunto, radicada con el número 20153210081262 de fecha 12 de febrero de 2015, en el cual solicita concepto sobre la prescripción de la acción de cobro, de manera atenta esta Oficina Asesora de Jurídica da respuesta en los siguientes términos:

PETICION:

Señala la peticionaria:

En los procesos de jurisdicción coactiva se libró mandamiento de pago dentro de los términos señalados en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, mandamiento que fue notificado de conformidad con las normas procedimentales en materia tributaria, posteriormente se surtió el procedimiento señalado en el Estatuto Tributario ordenando las medidas cautelares (embargo de cuentas bancarias y de bienes muebles e inmuebles), sin embargo a la fecha no se obtuvo el pago de la mayoría de los procesos, ¿es procedente la prescripción de la acción señalada en el artículo 817 del Estatuto Tributario? En caso afirmativo cual sería el procedimiento a seguir?

De conformidad con lo anterior, operaría la pérdida de fuerza ejecutoria de las resoluciones de fallo tomadas como títulos dentro de los cuales se libró mandamiento de pago y la administración ordenó continuar con el trámite del proceso de cobro coactivo, dentro del término de cinco (5) años establecidos en el C.C.A., la administración puede realizar dicho cobro?

CONSIDERACIONES:

La prescripción de la acción para los efectos que nos ocupa, se funda en lo dispuesto en el **artículo 159** de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 a su vez modificado por el **artículo 206, del Decreto 019 de 2012.**

El citado artículo establece:

“La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20151340062961



10-03-2015

interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago" (negrillas fuera de texto).

Al respecto, el H. Consejo de Estado, en sentencia de fecha trece (13) de octubre de 2006, dictada dentro del expediente número 11001000000020030213101 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con ponencia del magistrado Darío Quiñonez Pinilla, manifestó:

"...De manera que en los procesos por jurisdicción coactiva en los que se persiga la ejecución de multas impuestas por violación de normas de tránsito, existe norma especial que regula la prescripción de la sanción y es la contenida en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, antes transcrito.

Dicha norma prevé que la acción ejecutiva a través de la cual se pretenda el cumplimiento de las sanciones impuestas por violación de las normas de tránsito prescribirá en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda.

Así las cosas, para efectos de la contabilización del término de prescripción de la acción ejecutiva se deben tener en cuenta dos aspectos: (i) que dicho término comienza a contarse a partir de la ocurrencia del hecho por el cual se impuso la sanción y (ii) que se interrumpe con la presentación de la demanda. En relación con esto último, se precisa que como en los procesos de jurisdicción coactiva no se procede mediante demanda, debe entenderse, entonces, que el término de prescripción se interrumpe desde cuándo se dicta el mandamiento de pago..." (Negrillas fuera del texto)

Es necesario señalar que las autoridades de tránsito de la respectiva jurisdicción tienen la facultad de exigir el cobro, producto de la infracción que se cometió, si ello no ocurre durante el término señalado anteriormente, es decir, tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho, prescribe la acción, ya que la prescripción extingue el derecho por no haberse hecho uso del mismo, y se interrumpirá con la presentación de la demanda. La facultad señalada se deriva de la autonomía que tienen las entidades territoriales en desarrollo de lo establecido en el artículo 287 de la Constitución Política y el Código Nacional de Tránsito. (Subrayas y negrilla fuera de texto)

(...)"

La Ley 1066 del 29 de julio de 2006, mediante la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, establece en el Artículo Primero lo siguiente:

"Artículo 1º. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público".

Con la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006 el procedimiento aplicable a los procesos que por jurisdicción coactiva deban adelantar los organismos de



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20151340062961



10-03-2015

tránsito, es el establecido en el Estatuto Tributario, por expreso mandato del Artículo 5 de la ley en mención, que señala: (subrayas y negrillas fuera de texto)

ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. *Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario (negrillas fuera de texto).*

PARÁGRAFO 1o. *Se excluyen del campo de aplicación de la presente ley las deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una actividad de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad.*

PARÁGRAFO 2o. *Los representantes legales de las entidades a que hace referencia el presente artículo, para efectos de dar por terminados los procesos de cobro coactivo y proceder a su archivo, quedan facultados para dar aplicación a los incisos 1o y 2o del artículo 820 del Estatuto Tributario.*

PARÁGRAFO 3o. *Las Administradoras de Régimen de Prima Media con Prestación Definida seguirán ejerciendo la facultad de cobro coactivo que les fue otorgada por la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias". (Negrillas fuera de texto).*

En cuanto a la vigencia de la Ley 1066 de 2006, ésta se encuentra clara y expresamente regulada en su artículo 21, la que quedó sujeta a su promulgación, es decir, del 29 de julio de 2006, fecha en la que fue publicada en el Diario Oficial 46.344".

Conforme lo anterior, el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 a su vez modificado por el artículo 206 del Decreto 019 de 2012, constituye norma especial en materia de prescripción de las infracciones al tránsito.

Razón por la cual, el Honorable Consejo de Estado manifestó que la acción ejecutiva a través de la cual se pretenda el cumplimiento de las sanciones impuestas por violación a las normas de tránsito prescribe en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

Así las cosas, estableció que las autoridades de tránsito de la respectiva jurisdicción tienen la facultad de exigir el cobro, producto de la infracción que se cometió, si ello no ocurre durante el término señalado anteriormente, es decir, tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho, prescribe la



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20151340062961



10-03-2015

acción, ya que la prescripción extingue el derecho por no haberse hecho uso del mismo, y se interrumpirá con la presentación de la demanda. La facultad señalada se deriva de la autonomía que tienen las entidades territoriales en desarrollo de lo establecido en el artículo 287 de la Constitución Política y el Código Nacional de Tránsito.

Por otro lado, la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, mediante la cual se dictan normas para la normalización de cartera pública, estipulo en cuanto a la gestión del recudo de cartera pública:

“Artículo 1º. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público”.

A su turno estableció la citada norma en el artículo 5:

“ARTÍCULO 5º. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario” (Subrayas y negrillas fuera de texto)

En consecuencia, determino el Consejo de Estado que con la entrada en vigencia de la citada norma el procedimiento aplicable a los procesos que por jurisdicción coactiva que deban adelantar los organismos de tránsito es el establecido en el Estatuto Tributario, por expreso mandato del artículo 5 de la Ley en mención.

El fundamento jurídico establecido para la citada determinación fue:

“Con especial relevancia debe resaltarse que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, y reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, determinan que las normas procedimentales o instrumentales, son de orden público y de aplicación inmediata, razón por la cual prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que empiezan a regir. Así lo estableció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante Sentencia de septiembre treinta (30) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), Expediente No. 5658, C.P. Jaime Abella Zárate:

“Otra es la situación en relación con las normas procedimentales o instrumentales, que conforme su carácter de orden público (art. 6º. del C.P.C.) son de aplicación inmediata y prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, según las voces del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, con la excepción que él mismo contempla. De manera que las previsiones contenidas en normas sustantivas se aplican a los hechos ocurridos bajo su



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20151340062961



10-03-2015

vigencia, y los procedimientos aplicables para hacer efectivas sus disposiciones son los vigentes en la época en que éstos se adelanten. Aun cuando los actos determinativos se dicten, discutan y definan con posterioridad a la derogatoria o modificación de la ley sustancial que les dio fundamento" (resalta la Oficina Jurídica).

Por lo anterior, para este despacho la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley 1066 de 2006, el Decreto Presidencial 4473 del 15 de Diciembre de 2006 y el Decreto Distrital 066 del 15 de Febrero de 2007 son de aplicación inmediata para el caso de las multas y procesos administrativos sancionatorios por infracciones a las normas de tránsito que estén a cargo de cualquier organismo del orden municipal que tenga facultades para el recaudo de cartera en los términos establecidos en la citada ley".

De conformidad con las disposiciones legales citadas y teniendo en cuenta que le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en esta materia, según el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 1° de la Ley 769 de 2002, esta Oficina Asesora Jurídica considera que la prescripción, es una institución legal que se deben aplicar por parte de los organismos de tránsito, así:

La prescripción se decreta en los términos consagrados en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la Ley 1383 de 2010 a su vez modificado por el artículo 206 del Decreto 019 de 2012, en concordancia con la Ley 1066 de 2006, una vez transcurridos tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho.

Ahora bien, realizado el anterior análisis surge el interrogante cual sería el término que empieza a correr nuevamente a partir de la notificación del mandamiento de pago, al respecto es preciso señalar:

El estatuto tributario contempla la acción de cobro en los artículos 817 y 818, estableciendo al respecto:

"ARTÍCULO 817. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. <Artículo modificado por el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte



Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20151340062961



10-03-2015

ARTICULO 818. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TERMINO DE PRESCRIPCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 81 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta:

- La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria,
- La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario.
- El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario".

Conforme la norma en cita, interrumpida la prescripción el término empezara a correr **de nuevo** desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago.

Por otro lado, frente al fenómeno de la prescripción, establece el Código Civil en el artículo 2536:

"ARTICULO 2536. <PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA Y ORDINARIA>. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término."

Así las cosas, y como quiera que en materia de multas por infracciones al tránsito existe norma especial la cual señala que estas prescriben en el término de 3 años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, el término que se contaría nuevamente sería 3 años, y el procedimiento aplicable para su recaudo es el establecido en el estatuto tributario.

Ahora bien, en relación a la consulta elevada en su escrito, este Despacho se permite señalar que es pertinente que se analice cada caso en particular con el propósito de determinar si se realizaron todas las actuaciones pertinentes dentro de los tres (3) años siguientes a que se hizo exigible la obligación toda vez que una vez iniciada debe culminarse en ese tiempo, so pena que opere la prescripción.



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



ENTIDAD
ISO 9001:2008
NTC GP 1000:2009
CERTIFICADA

SG-2014006883 A
SG-2014006883 H

Para contestar cite:

Radicado MT No.: 20151340062961



10-03-2015

En los anteriores términos se absuelve de manera abstracta el objeto de consulta, concepto que se emite de conformidad con lo preceptuados en los artículos 14 y 28 de la Ley 1437 de 2011 *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*.

Atentamente,

DANIEL ANTONIO HINESTROSA GRISALES
Jefe Oficina Asesora de Jurídica (E)

Proyectó: Magda Paola Suarez Alejo.
Revisó: Claudia Fabiola Montoya
Fecha de elaboración: 07-2-2015
Número de radicado que responde: 20153210081262
Tipo de respuesta Total (x) Parcial ()